

Una provincia en la cornisa

Por Diego Valenzuela

Para LA NACION

La provincia de Buenos Aires enfrenta la quinta huelga docente en lo que va del año, sigue perdiendo días de clase y se encamina a incumplir la ley de financiamiento educativo. Su gobierno se endurece y amenaza con alargar las clases y no pagar los días de paro, mientras los sindicatos doblan la apuesta. Cada cual atiende su juego, mientras la educación pública bonaerense se deteriora.

Buenos Aires es la provincia que realiza el mayor esfuerzo por la educación de todo el país, y aun así es la de mayor conflictividad. La educación representa un 34,3% del gasto total provincial, muy por encima del promedio (23,8%) y casi triplicando al gasto que realiza Santa Cruz (12,1%), en el otro extremo de la lista. El salario de un docente de jornada simple con 10 años de antigüedad, según un informe del área educativa de la ONG Cippec, es de 1649 pesos, lo que ubica a Buenos Aires en el puesto 11 sobre 24 provincias (en 2002 estaba en el puesto 16). En Santa Cruz, un docente de igual cargo gana 3765 pesos.

La tendencia es negativa desde todo punto de vista para la provincia más habitada del

país: en un período de crecimiento, tiene problemas fiscales y financieros serios. Buenos Aires tiene el 40% de la matrícula escolar del país, y esto implica que sus problemas son dilemas nacionales. Tiene la mayor tasa de abandono en el polimodal, el mayor pase a la escuela privada y ha caído notablemente en calidad educativa. "Son los chicos del conurbano los que están pagando esta situación. Entre 1997 y 2005, la provincia

La causa de fondo del conflicto docente es la coparticipación, que sigue castigando a Buenos Aires

cayó 9 puestos en el ranking del país y va camino a incumplir la ley de financiamiento educativo", afirma Axel Rivas, director del área educativa de Cippec.

La causa de fondo de esta situación es la desigualdad de recursos que enfrenta Buenos Aires. Los recursos de coparticipación por habitante de Tierra del Fuego son 3237 pesos, y los de Santa Cruz, 2242,

mientras que Buenos Aires aparece en el último puesto, con 459 pesos. Si sumamos los recursos provinciales, Buenos Aires sigue en el último lugar, con 1496 pesos por habitante contra 10.509 de Santa Cruz y un promedio general de 3428. He allí la desigualdad estructural: la provincia de Buenos Aires tiene el Estado más pobre del país y es la que hace el mayor esfuerzo fiscal por la educación.

El Ministerio de Educación nacional tiene buenas intenciones: hizo que el presupuesto para educación apunte a llegar al 6% del PBI, pero carece de herramientas para responder a una situación de carácter eminentemente político. En la cartera están inquietos con la dureza de la protesta docente. Dicen: "Los paros son indiscriminados. La huelga debería ser el último recurso, pero para los gremios es un arma permanente; piden una suba del 20% sobre una de 24% otorgada en marzo, lo que está muy por encima de la inflación

real y no ocurre en ningún otro sector del país. Muchos maestros hacen huelga en la escuela pública y trabajan en la privada. Van a conseguir que se acelere el crecimiento de la matrícula privada".

Hay que decirlo: reina la hipocresía. Cada uno cuida su quinta y evita analizar el conjunto. El gobierno de Daniel Scioli no se anima a plantear en voz alta la discriminación fiscal que sufre la provincia, rehén

Los gremialistas defienden sus derechos, pero someten a excesiva presión al gobierno de Scioli

de la Nación. Sus autoridades vienen negociando con la Nación la refinanciación de deudas, pateando el problema para adelante, mientras intentan recolectar recursos con la labor de Santiago Montoya y una suba marginal de impuestos que no alcanza. ¿Vuelven los "patacones"?

Los gremios defienden legítimamente sus derechos, pero no aceptan discutir sobre

datos objetivos. Más que seguir presionando al gobierno provincial, deberían plegarse a él reclamando por la injusticia en el reparto de los recursos de coparticipación. La FEB es un sindicato que apoyó al campo y se hizo más intransigente ante el gobierno en la demanda salarial. Suteba era más cercano al gobierno provincial, pero no quiso quedar rezagado en las demandas, dado que tradicionalmente tenía banderas combativas. Con razón, reclaman mejorar el salario frente a las buenas noticias nacionales (recaudación récord, superávit fiscal), pero quizá no perciben que están llevando a la provincia a una situación límite.

La situación es crítica. La provincia puede seguir tapando el problema con aumentos de impuestos, refinanciaciones de deuda y hasta emisión monetaria (cuasi monedas). Tanto el retraso salarial como que la Nación resigne fondos de coparticipación parecen caminos inviables. Una solución sería crear un sistema de compensación estable para Buenos Aires -la propuesta de Cippec-, orientado a atender la emergencia en salud y educación y sin generar perdedores en el reparto de los recursos. © LA NACION